

Editorial

Los desafíos de la paz

Casi un año después de la firma del Acuerdo de paz que puso fin a la guerra, también se ha dado por concluido oficialmente el cese del enfrentamiento armado. Con ello, se ha resuelto uno de los problemas fundamentales de El Salvador. La finalización del conflicto armado ha liberado al país para enfrentar otros problemas graves, que no han sido resueltos por el Acuerdo de paz y cuya resolución es necesaria y urgente para la construcción de la democracia. Es una tarea ingente y complicada, pero hay que aplicarse a ella cuanto antes y con todos los recursos disponibles. Sólo en la medida que El Salvador vaya resolviendo estos graves problemas que lo desafían históricamente, irá alejándose de la guerra e irá aproximándose a la posibilidad de una convivencia más solidaria y fraternal.

La perspectiva electoral es una dificultad adicional para enfrentar estos desafíos. Los intereses electorales, cuyo objeto es la toma del poder del Estado, no sólo distorsionan, sino que hasta pueden ser contrarios a los intereses nacionales. Las elecciones de 1994 decidirán quién controlará el poder estatal, pero no resolverán los desafíos de El Salvador, aunque los partidos políticos presuponen que desde el poder del Estado estarán en mejores condiciones para ello. Lo ideal sería que en la campaña electoral se discutieran a fondo estos desafíos y que los candidatos se esforzaran para ofrecer soluciones viables. Este editorial pretende aportar a esta discusión.

1. El desafío de la mentalidad militar

El proceso de cumplimiento de los acuerdos no ha podido concluir con uno de sus objetivos básicos, la desmilitarización de la sociedad. Ciertamente, hay que reconocer que se ha avanzado mucho, pero no lo suficiente como para considerar que El Salvador se ha desmilitarizado. Algunos compromisos importantes no han sido cumplidos según lo pac-

tado, la depuración de la Fuerza Armada es incompleta e insatisfactoria, tampoco se ha divulgado su nueva doctrina, se desconoce la existencia del tribunal de honor, las armas de guerra no se han recogido y siguen en manos de civiles, etc. Por el otro lado y más a mediano y largo plazo, aún persiste la mentalidad militar.

La mentalidad es un modo de vivir que conlleva y denuncia un modo de entender la vida. En El Salvador todavía se vive según esquemas militares, cuyas características son el autoritarismo, el verticalismo, la prepotencia y la impunidad. Estos esquemas predominan en el gobierno, en la política nacional, en los partidos políticos, en el sistema judicial, en el ámbito empresarial, en la vida familiar, etc. Por consiguiente, la mentalidad militar no es exclusiva de los militares, sino que permea toda la sociedad, tal como lo demuestran aquellos funcionarios gubernamentales que actúan autoritariamente y prepotentemente, por ejemplo, el secretario de prensa del presidente, quien dijo que no se considera obligado a verificar los informes provenientes de los organismos de inteligencia del Estado. Todavía seguimos entendiendo y juzgando la vida y el mundo desde concepciones militaristas. Por otro lado, la mentalidad militar, por su propia naturaleza, es resistente al cambio.

La manifestación más sobresaliente de esa mentalidad es la ostensible presencia de la Fuerza Armada en la sociedad. Los militares se resisten a retirarse a sus cuarteles y están alegando pretextos, con la connivencia del gobierno, para mantenerse presentes y activos en el ámbito civil. Primero se recurrió al ejército para patrullar las zonas cafetaleras, en lo que se dio en llamar misiones disuasivas para contener la delincuencia característica de la época de cosecha desde hace varios años. Ahora se acaba de anunciar que el ejército participará en el ordenamiento del tráfico vehicular de la capital y en el combate contra la delincuencia urbana. En realidad, los pretextos para mantener al ejército en la calle sobrarán en los próximos años.

La transición implica el reordenamiento del Estado y de la sociedad. La cuestión es quién lo llevará a cabo, los civiles o los militares. La respuesta del gobierno de ARENA es clara, los militares. La presencia del ejército en la esfera civil significa perpetuar la militarización y la mentalidad militar. Pero la responsabilidad no es sólo de ARENA y del presidente Cristiani, sino también de los mismos militares que se prestan a estos juegos peligrosos. La Fuerza Armada es la primera que debería negarse a asumir obligaciones y funciones que corresponden a la clase política y a los civiles.

Es cierto que la Constitución otorga al presidente la facultad para desplegar el ejército; sin embargo, es una concesión hecha para enfrentar situaciones límite y siempre con determinadas cautelas. Esta facultad

En El Salvador todavía se vive según esquemas militares, cuyas características son el autoritarismo, el verticalismo, la prepotencia y la impunidad.

constitucional, de hecho, no autoriza al presidente a recurrir al ejército cada vez que tiene que enfrentar una situación difícil. Al invocar esa facultad constitucional con cualquier pretexto, se la despoja de su fuerza y sentido.

No es misión de la Fuerza Armada combatir la delincuencia, ni siquiera de manera disuasiva —cualquier cosa que eso signifique—, tampoco es misión suya ordenar el tráfico vehicular, ni repartir útiles escolares, ni medicinas, ni construir carreteras, ni investigar el crimen organizado, ni dirigir los entes autónomos del Estado. Para combatir la delincuencia está la Policía Nacional y la Policía Nacional Civil. En este sentido, es inexplicable que los nuevos policías vayan a ser enviados a zonas donde la delincuencia tiene muy poca incidencia, cuando lo lógico es reforzar las zonas urbanas densamente pobladas, donde aquélla está ocasionando más estragos. Para ordenar el tránsito está también la policía. Para atender la educación, la salud y la infraestructura del país están los ministerios. Para investigar el crimen y velar por la seguridad de la nación está la policía especializada, controlada por civiles.

Casi todas las actividades en las que participa la Fuerza Armada en la actualidad son simples pretextos para mantenerse en el ámbito de lo civil. Un medio eficaz para obligar a los militares a limitarse a cumplir su función constitucional es revisar el presupuesto de defensa, recortarlo de acuerdo a las nuevas funciones y tamaño del ejército y transferir el excedente a otras áreas que necesitan refuerzo presupuestario urgentemente. Esto sólo será posible si el poder civil predomina efectivamente sobre el militar y un campo donde es urgente comenzar a ejercer control y supervisión es el presupuesto militar.

La resistencia que quince altos jefes y oficiales del ejército han presentado a la depuración es otra muestra de la militarización en cuanto significa, por parte de la cúpula de la Fuerza Armada, una desobediencia abierta que impide tomar las decisiones administrativas acordadas y, por parte del presidente Cristiani, connivencia con las pretensiones de los militares. En el fondo, éstos se niegan a reconocer la facultad del poder ejecutivo para investigar y juzgar si sus acciones son conformes con el derecho, imposibilitando que el presidente cumpla con un compromiso de carácter internacional, tal como se lo ha recordado Naciones Unidas.

La Comisión de la verdad está poniendo a prueba a los militares desde otro ángulo. La Fuerza Armada y el gobierno de ARENA han

estado buscando la manera de evitar que en el informe se mencionen los nombres de los responsables de los crímenes investigados —ante la negativa de los comisionados, han llegado incluso a pedir que el informe se haga público hasta después de las elecciones. Hasta ahora, los militares y los funcionarios gubernamentales siempre dijeron que los responsables de las violaciones de los derechos humanos y de los delitos comunes habían actuado por cuenta propia, librando al ejército de toda responsabilidad. Ahora, cuando llega el momento de confrontar la verdad de algunos hechos, los presuntos implicados están pidiendo sin empacho que la Fuerza Armada asuma la responsabilidad, lo cual implica que prefieren destruirla antes que abandonarla.

Estos repetidos y hasta ahora inútiles esfuerzos demuestran que la Fuerza Armada no está preparada para enfrentar públicamente la verdad. Esta es una razón poderosa para insistir en que la verdad debe conocerse, por más horrenda que sea. Aquí no tienen cabida ni la maniobra oportunista ni el chantaje, en el sentido de que la verdad provocaría la desestabilización y, o el caos. Indudablemente, la verdad que se diga conmocionará la conciencia nacional —y quizás hasta ponga fin a algunas candidaturas electorales—, pero, al fin de cuentas, será una conmoción saludable para todos. Los militares tendrán que irse, el gobierno de ARENA pagará el costo político de haberlos tolerado y protegido hasta la complicidad, la Fuerza Armada deberá revisar y cambiar su estructura organizativa y su doctrina, militares y políticos experimentarán que no son invulnerables al escrutinio de la opinión pública y la población verá por primera vez que la existencia de un organismo serio y responsable es capaz de llegar por lo menos a una parte importante de la verdad. El informe de la Comisión de la verdad será también una experiencia concreta de ejercicio democrático.

Las desventuras de la Policía Nacional Civil hay que atribuir las a la resistencia de la mentalidad y de las prácticas militaristas. Más consciente que inconscientemente, el desarrollo de esta institución ha encontrado toda clase de obstáculos hasta el extremo de graduar a unos policías que aún les faltaban algunos cursos importantes. De momento, la batalla la están ganando quienes desean mantener el esquema de los antiguos cuerpos de seguridad, con lo que éstos tienen de dependencia directa de la Fuerza Armada y de tendencia a violar los derechos humanos.

En relación directa con el boicot a la nueva policía está la promoción y defensa de los derechos humanos. Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las denuncias de violaciones de los últimos meses del año pasado no bajan de cien y casi la mitad de los presuntos responsables pertenece al gobierno. La mayoría de las denun-

cias están referidas a la violación de la vida y la integridad personal. La División de Derechos Humanos de ONUSAL responsabilizó a las policías nacionales y municipales de muchas de esas violaciones. El IDHUCA ha registrado un salto alarmante en la cantidad de muertos registrados en la prensa escrita en enero de 1993, alcanzando la cifra pico de cien. La tercera parte de estas víctimas es resultado de hechos delictivos, pero la mayoría se debe a escuadrones de la muerte y desconocidos.

Exceptuando al procurador de derechos humanos, el resto del gobierno contempla con la pasividad e indiferencia de siempre este incremento de violaciones. Asimismo, el gobierno actual todavía no ha reaccionado, ni parece estar en disposición para hacerlo, ante los repetidos reclamos y las recomendaciones de la División de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del experto independiente en esta materia. Los derechos humanos no tienen prioridad ni en la agenda del gobierno ni en la de la clase política. No se puede hablar con propiedad de democracia cuando los derechos humanos siguen siendo violados tan significativa e impunemente.

En suma, ni los militares están dispuestos a retirarse a sus cuarteles ni el gobierno actual ni ARENA quieren permitirlo; al contrario, están ofreciendo una resistencia tenaz al predominio de los civiles. Por lo tanto, de este lado no se puede esperar la desmilitarización del Estado y de la sociedad. Costará mucho esfuerzo y tiempo convencer a los militares y a quienes promueven su mentalidad que su época es cosa del pasado. La transición tiene que trabajar mucho aún para conquistar los ámbitos civiles que los militares han monopolizado hasta ahora a base de privilegios y prerrogativas concedidas y toleradas por un pasado que ya es historia. Es necesario ejercer presión desde todos los ámbitos y con todas las fuerzas sociales disponibles para hacer sentir el rechazo de la sociedad civil a la continuidad de los privilegios



y las prerrogativas de los militares.

2. El desafío de la pobreza y la reforma social

En El Salvador, la pobreza no es un fenómeno de la década recién pasada; sin embargo, las estadísticas muestran un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los salvadoreños en los últimos cinco años. En la actualidad hay más pobres, es decir, más salvadoreños tienen ingresos que están por debajo de la línea de la pobreza y ha crecido el porcentaje de quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

No sólo se ha mantenido la tendencia a la concentración del ingreso entre los sectores más ricos, sino que como consecuencia de la crisis y de las medidas de estabilización y ajuste estructural, amplios segmentos de la clase media y trabajadores de la industria y los servicios cayeron por debajo de la línea de la pobreza y sus condiciones de acceso a la vivienda y a los servicios básicos de salud y educación se deterioraron. Muchos hogares no han podido sostener la infraestructura doméstica básica y sus redes mínimas de seguridad se han debilitado. Asimismo, para muchos padres de familia es cada vez más difícil ofrecer a sus hijos las mismas oportunidades de educación, ascenso económico e integración social que ellos tuvieron, reduciendo las expectativas de sus hogares. La profundización y extensión de este fenómeno explica en gran medida la masiva emigración de salvadoreños al norte y la delincuencia.

Este vasto fenómeno que no es exclusivo de El Salvador, sino general en toda América Latina, es lo que ha obligado al Banco Interamericano de Desarrollo a reflexionar y revisar seriamente la política económica de ajuste estructural, orientada a la superación de los desequilibrios macroeconómicos, pero aplicada con criterios economicistas y de muy corto plazo. Ciertamente, en El Salvador, la magnitud alcanzada por la pobreza cuestiona la viabilidad económica y política del modelo del gobierno actual y obliga a revertir en el menor tiempo posible la distribución desigual del ingreso y de los beneficios del crecimiento económico. La experiencia muestra que pese a las medidas monetarias, financieras, fiscales y de liberalización del aparato productivo, el modelo del Fondo Monetario Internacional no es viable al excluir económicamente a la mayoría de los sectores sociales, lo cual, a su vez, es desestabilizador políticamente.

El Salvador debe atender cuidadosamente la llamada de advertencia que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la insuficiencia estructural del modelo de estabilidad y ajuste, puesto que ya es evidente que el crecimiento económico no resolverá por sí solo las desigualdades sociales, sobre todo cuando las desigualdades iniciales

son muy marcadas. Más aún, la situación actual es insostenible a mediano y largo plazo, ya que el éxito de la economía de mercado implica la confianza pública y la estabilidad institucional. Es prácticamente imposible y políticamente arriesgado seguir negando la existencia de una escandalosa concentración de la riqueza, la exclusión económica y social de la mayoría de los salvadoreños así como también la consolidación del antiguo dualismo económico y social. Todo esto quiere decir que están dadas las condiciones objetivas necesarias para el conflicto social.

En consecuencia, El Salvador necesita urgentemente una política económica y social integral, es decir, una política que no sea puramente económica y donde lo social no tenga carácter meramente asistencialista y, o sectorial. Una política económica y social integral e integradora debe atacar de frente y de modo radical los obstáculos provenientes de la injusticia estructural. La reforma necesaria y urgente debe pensar lo social en los mismos términos estratégicos en los que ha pensado y puesto en práctica lo económico, abandonando los enfoques economicistas de la década pasada. Lo económico y lo social deben complementarse y reforzarse en una misma lógica de eficiencia e igualdad.

La eficacia de la reforma social se mide con los mismos indicadores que señalan la profundización y extensión de la pobreza. El objetivo de la reforma social debe ser disminuir considerablemente los bajos ingresos y la insatisfacción de las necesidades básicas. Los programas asistencialistas, aunque necesarios en una situación de emergencia, sólo sirven para paliar los efectos más dramáticos de la injusticia estructural.

Esa doble forma de exclusión social —bajos ingresos e insatisfacción de las necesidades básicas— es éticamente inaceptable, porque somete a condiciones de vida inhumanas, injustas y violentas a la mayoría de la población —tal como lo recuerda Juan Pablo II en su mensaje de año nuevo. Desde el punto de vista económico, según el Banco Interamericano de Desarrollo, es ineficiente mantener cerca de la mitad de la población marginada del proceso productivo y del consumo moderno, y sin condiciones para incorporarse a actividades más productivas. La exclusión económica de sectores importantes de la población es un gran obstáculo para el aumento de las inversiones que, por otro lado, son indispensables para un desarrollo sostenido.

La transición tiene que trabajar mucho aún para conquistar los ámbitos civiles que los militares han monopolizado hasta ahora a base de privilegios y prerrogativas concedidas y toleradas por un pasado que ya es historia.

Desde el punto de vista político, la exclusión de sectores significativos de la población no es compatible con la democracia. La exclusión económica es también exclusión política, que, a su vez, pone en grave peligro la gobernabilidad. Si el país se vuelve ingobernable, las reformas económicas serán ineficientes, desaparecerán las pocas inversiones existentes y el crecimiento económico se volverá efímero.

El reto consiste en hacer una reforma social de gran envergadura que haga mucho más real la democracia al redistribuir la riqueza nacional más equitativamente, al cerrar la brecha entre los poquísimos ricos y los muchísimos pobres, y al ofrecer la oportunidad de una vida humana, digna y justa. Los planteamientos economicistas y cortoplacistas están seriamente cuestionados por la misma realidad deshumanizante y deshumanizadora que han creado.

El incumplimiento del compromiso de la transferencia de tierra, debido a una falta de visión económica y política de más largo plazo, a la falta de voluntad política y a la influencia de intereses espúreos, implica desaprovechar una oportunidad histórica para comenzar a resolver una de las causas estructurales del conflicto social y de la guerra misma. Tanto el gobierno como el FMLN deben hacer un esfuerzo mucho mayor para resolver este espinoso compromiso postergado del Acuerdo de paz. A finales de enero, cuando debía concluir la primera fase de la transferencia, sólo se había negociado poco menos de la mitad de la tierra comprometida en dicha fase y únicamente se había transferido efectivamente la mitad de la tierra ya negociada; pero ninguna de esas transferencias ha sido legalizada aún.

El cumplimiento de este acuerdo va más allá de entregar unas tierras. Por un lado, se trata de proporcionar un medio eficaz para hacer posible la reincorporación a la vida productiva del país a miles de familias campesinas que, de otro modo, quedarían abandonadas a su propia suerte. No olvidemos que durante la guerra, la vida de la mayoría de ellas estaba resuelta por cada una de las partes. Negativamente, se trata de evitar el malestar y la descomposición social en el campo. Por otro lado, y positivamente, es una oportunidad para ensayar modos de producción y de organización que hagan posible el desarrollo de la economía de los pobres, ya sea en actividades agropecuarias, manufactureras, etc. Lo importante es que los pobres resuelvan sus propios problemas, no con asistencialismo, sino con un apoyo real y efectivo. Esta podría ser una alternativa real para comenzar a pensar lo económico social como una auténtica estrategia de desarrollo de y para las mayorías populares.

La estabilidad y la gobernabilidad de El Salvador, así como su desarrollo económico pasan por una solución aceptable para la situación de



los desmovilizados campesinos. Ante este desafío es inevitable tener muy presente la situación nicaragüense, donde los llamados re-contras, grupos armados que operan en el norte de ese país, se han convertido en el problema más importante de Nicaragua. Estos grupos exigen con las armas en la mano el cumplimiento de compromisos socioeconómicos y políticos adquiridos por el gobierno nicaragüense, obligando a su vez al ejército a responder con ofensivas militares.

Quienes en El Salvador se oponen a este tipo de solución deberían considerar que sin estabilidad social los resultados positivos macroeconómicos se anulan, las inversiones se alejan y la economía se estanca fácilmente. Esto no le conviene ni al país como un todo ni a los empresarios, sobre todo cuando la región centroamericana está buscando insertarse en la economía mundial.

En estos momentos, El Salvador está enfrentado al reto de establecer condiciones para hacer posible los consensos económico sociales fundamentales. Esas condiciones pasan, ciertamente, por el crecimiento de la economía, por el éxito empresarial y por la seguridad jurídica, pero también pasan, necesariamente, por una desigualdad económica menor, por la libertad de asociación y por el bienestar general de la población. Por consiguiente, es esencial que el Estado y la sociedad tengan capacidad para promover los consensos sociales y políticos necesarios.

3. La reconstitución de la sociedad

La década de guerra ha dejado al cuerpo social salvadoreño desgarrado; todas las relaciones que lo conforman han sido desajustadas en gran medida. El elevado índice de delincuencia, las llamadas "maras", la violación sexual, la corrupción gubernamental, el narcotráfico, etc., no son más que las manifestaciones violentas más visibles del impacto destructivo que el conflicto bélico ha tenido sobre el cuerpo social y su conciencia colectiva. Todos esos fenómenos se deben al profundo desajuste que ha sufrido la sociedad salvadoreña y su corrección impone un reto nuevo y difícil.

La cruda descomposición social que exhibe el país ha generado una gran confusión sobre sus raíces y también sobre los medios más adecuados para suprimirla. La sociedad en general, pero sobre todo algunos políticos se resisten a reconocer que el origen de estos graves fenómenos antisociales se encuentra en la generalización y profundización de la pobreza y en la falta de oportunidades para la mayoría de la población. A ello contribuye la incapacidad y, o la falta de voluntad política del gobierno actual para desarmar a la población e impedir el tráfico con armas de guerra. La libre posesión de esta clase de armas ha incrementado el nivel de la violencia que caracteriza a la delincuencia actual que sufre el país.

La guerra misma y la política económica del gobierno de ARENA han agravado esa descomposición social que ahora produce tanto miedo. Por lo tanto, no sólo es urgente revisar a fondo y replantear la política económica y hacer de la reforma social un elemento estratégico de la misma, sino que, además, es urgente informar y educar a la población sobre las causas de los dinamismos antisociales y sobre su remedio.

Además de estos dinamismos más llamativos y aparentemente más destructivos, existe una increíble tergiversación de los juicios éticos. Los generales y los coroneles se declaran ofendidos y rechazan el dictamen de la Comisión ad hoc, tratan de neutralizar los efectos del informe de la Comisión de la verdad y acusan de difamación a la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental y a la UNTS porque no prueban sus afirmaciones. Un juez afirma que la sobreviviente de la masacre de El Mozote miente porque no se han encontrado restos humanos en todos los sitios señalados por ella. En este caso, un alto funcionario del sistema judicial se niega a hablar de masacre y prefiere llamar "violencia masiva" al asesinato de más de cien mujeres, niños y ancianos. De esta manera, las víctimas y sus defensores resultan acusados. Como por arte de magia, las víctimas se han convertido en criminales y éstos en víctimas, y la administración de justicia, inoperante en miles de casos, se muestra diligente en encausar a los defensores de los derechos humanos.

El Salvador necesita urgentemente una política económica y social integral, es decir, una política que no sea puramente económica y donde lo social no tenga carácter meramente asistencialista y, o sectorial.

Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia descalifica indignado, y sin conocer el texto, el informe de la Comisión de la verdad. El poder y el dinero siguen aprisionando a la verdad y la justicia en El Salvador.

Las décadas de militarismo, la ineficiencia crónica del sistema judicial y la corrupción gubernamental han generado lo que podría llamarse una cultura de la ilegalidad. Por supuesto, se reconoce la existencia de la ley fundamental y de las leyes secundarias, pero en la práctica todo ello se reduce a legalismos. En general, el salvadoreño no espera nada de lo legal, lo cual no debe causar extrañeza, pues la justicia le ha sido negada estructuralmente durante décadas. La dura experiencia de sobrevivir, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, ha enseñado al salvadoreño que si quiere salir adelante debe recurrir a la ilegalidad y aprender a vivir en ella. De esta manera, las actitudes y los comportamientos ilegales suelen ser lo ordinario, aun con los riesgos y peligros que ello implica. Por eso mismo, lo ilegal es también lo heroico y es que vivir en las condiciones en que lo hace la población salvadoreña en el territorio nacional y en el estadounidense es un acto heroico de todos los días. Sin embargo, esta heroicidad —y en algunos casos hasta el orgullo nacional— no debe ocultar el profundo mal que aqueja a la sociedad al forzar a la mayoría de sus miembros a vivir en y de lo ilegal.

El final de la guerra está favoreciendo el pragmatismo sobre el realismo, con todo lo que éste último tiene de utopía. Para sorpresa de propios y extraños, en ciertos sectores del FMLN ha cobrado fuerza la idea de que la posibilidad es ajena a la normatividad y que algo es siempre mejor que nada. Las tendencias acomodaticias y erráticas que han surgido en el FMLN lo podrían llegar a dividir y debilitar, precisamente, cuando debe ejercer un liderazgo fuerte y dirigir la transición, promoviendo la verdad y la justicia. Donde se esperaba encontrar un compromiso con las soluciones verdaderas y radicales, para resolver los problemas atacando sus raíces, han aparecido compromisos fáciles, muy cuestionables para la buena marcha de la práctica política del FMLN.

Existen indicios de que entre los desmovilizados hay cierto desencanto. Muchos piensan que, así como durante la guerra todas sus necesidades materiales fueron resueltas por sus respectivos ejércitos, ahora deben ser mantenidos por el gobierno o por el partido, en el caso del FMLN,

por las organizaciones no gubernamentales y la ayuda internacional. Los desmovilizados no logran interiorizar su nueva situación, lo cual no es extraño, pero si estas tendencias que rechazan la capacitación y el trabajo no son revertidas en el corto plazo, los desmovilizados de ambos bandos se convertirán en otra pesada hipoteca nacional y en un terreno fértil para la delincuencia. Por otro lado, la consolidación de esas tendencias significaría que el salvadoreño estaría perdiendo la cultura del trabajo que lo ha caracterizado. Es comprensible que el fin de la guerra relaje los ánimos después de años de tensión y sufrimiento, pero es peligroso que esa relajación se convierta en permisividad y libertinaje.

En la clase política es evidente la tendencia a la disgregación. Tanto la derecha como la izquierda están siendo cuestionadas desde sus propias filas por el fraccionamiento. Por lo general, los partidos políticos no cuentan de un análisis serio de la realidad nacional y carecen de liderazgos definidos. La proliferación de nuevos partidos implica que los existentes no representan las inquietudes ni los intereses de sus afiliados y simpatizantes. La disgregación política a la que estamos asistiendo no es tanto una consecuencia del pluralismo democrático, sino que más bien refleja la incapacidad de los institutos políticos existentes para responder a las exigencias de la transición, cuando no su agotamiento, por lo menos en la percepción de quienes crean otras alternativas.

A nivel popular existe desconcierto e incertidumbre. En el pueblo se siente una especie de desamparo. El dinamismo de la guerra generó sus propios liderazgos y una disciplina. No se trata de regresar a ellos, sino de superar los dinamismo antisociales y disgregadores que predominan en el cuerpo social en la actualidad. El vacío social que se ha producido ha exacerbado la violencia colectiva, la confusión, la mentira, la tergiversación de los principios básicos, el pragmatismo sin ideales ni ilusión, un sálvese quien pueda político, el desentendimiento de las mayorías pobres, el egoísmo social y personal. No sería exagerado afirmar que, desde el punto de vista social, El Salvador se aproxima al borde del abismo.

La reconstitución del cuerpo social y de la conciencia colectiva exige mucho más que reconciliaciones verbales y clases de moral y cívica; la pena de muerte que exige la intolerancia y la emotividad de la derecha tiene más de venganza y revanchismo social que de justicia. Todo esto muestra que el final del conflicto armado no ha suprimido las causas que lo motivaron. Las raíces siguen ahí, quizás agravadas por las secuelas de la guerra.

El desafío de reconstituir la sociedad debe ser asumido en primer lugar por las organizaciones populares, las iglesias históricas, los centros educativos con inspiración cristiana, las personalidades nacionales

y también por los partidos políticos y el Estado. Esta es una tarea de mediano y largo plazo, en la cual también se juega el bienestar de las mayorías populares salvadoreñas y la existencia de la nación misma. Resolver el conflicto implica eliminar las raíces estructurales que lo causaron y los efectos destructivos que la dinámica de la guerra generó. La solución comprende el desarrollo sostenido, el bienestar de la población, la desmilitarización y la vigencia plena de los derechos humanos.

San Salvador, 25 de febrero de 1993.

